



Asamblea Nacional

Secretaría General

TRÁMITE LEGISLATIVO 2018-2019

ANTEPROYECTO DE LEY: **152**

PROYECTO DE LEY:

LEY:

GACETA OFICIAL:

TÍTULO:

QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL Y DICTA OTRA
DISPOSICIÓN.

FECHA DE PRESENTACIÓN:

PROPONENTE:

PRESENTADO POR PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

COMISIÓN:

**GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES.**

Panamá, 10 de enero de 2018.

Honorable Diputada

Yanibel Abrego

Presidenta

Asamblea Nacional

Señora Presidenta:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, que establece el ejercicio de la iniciativa ciudadana, presento, como ciudadano panameño, para su consideración el Anteproyecto de Ley, **Que modifica el Código Penal y dicta otra disposición**, el cual merece la siguiente:

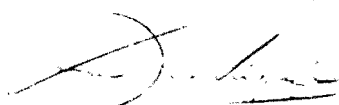
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En ejercicio de la iniciativa ciudadana que nos confiere el artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a la consideración de esta Augusta Cámara, nuestro Anteproyecto de Ley que determina la muerte civil en la República de Panamá.

Respetada Señora Presidenta, la crisis institucional que vivimos se ha convertido en una situación insostenible para todos los panameños. Cada día vemos con más frecuencia actos delincuenciales y bochornosos por parte de las personas que fueron elegidas para servir a la nación y que no lo están haciendo. Se ha violentado el Estado de Derecho y la separación de los tres poderes del Estado, que parecen actuar en armoniosa conspiración en contra de los panameños. Es así que frente al gran sentimiento de impunidad que ahoga a la mayoría de los ciudadanos panameños, se hace necesario que desde el poder legislativo se tomen decisiones importantes que abonen en la lucha contra la corrupción. El desprestigiado nombre de la Asamblea Nacional hace casi imposible que la ciudadanía confíe en los Diputados para cumplir su rol constitucional de legislar a favor del pueblo panameño. Empero, urge un giro de timón que demuestre que no todo está perdido y creemos que el debate de iniciativas como esta, marca el comienzo de una nueva era de gestión pública en Panamá.

El 9 de enero de 1964, un grupo de jóvenes panameños dijeron basta a la situación de irrespeto insostenible que vivía en ese entonces la nación. Por ello, con tal referente como norte y como hicieron ellos en el momento histórico que les correspondía, hoy honramos su memoria, luchando nuevamente por rescatar nuestra nación de las manos de nuestro enemigo actual, la corrupción.

Esos mismos, que no han hecho más que explotar y lucrar históricamente a costa del pueblo, agrediendo nuestra dignidad como panameños, son quienes se ven beneficiados de sanciones débiles y lastimeras que no hacen más que contribuir a la mala imagen de la



administración de justicia de nuestro país, que comienza con el letargo cómplice del Ministerio Público, pero incluye a la sumisa Corte Suprema de Justicia. La poca voluntad de nuestros actuales gobernantes, desde cualquier posición de poder, hace necesario que el ciudadano, como soberano constitucional del poder público, se empodere y exija de la clase política las respuestas necesarias para liberar al país del pantano fangoso de la corrupción.

Un grupo de ciudadanos que hemos decidido poner de lado nuestras diferencias y trabajar en conjunto por el bien de la sociedad panameña, coincidimos no solo en que la corrupción, la impunidad y el mal manejo de los fondos públicos han detenido el vertiginoso crecimiento de la República de Panamá, sino también en que la muerte civil es una de las soluciones a tan complejo problema. Entendemos muerte civil, en su sentido más llano, como la separación de por vida de todos los corruptos de la administración de la cosa pública. Esta iniciativa pretende entonces, mediante precisas modificaciones al Código Penal y a la Ley de Contrataciones Públicas, evitar que cualquier persona condenada por delitos contra la Administración Pública pueda volver a ocupar cualquier función pública o perseguir contratos con el Estado. Mediante el recrudecimiento de penas de algunos de los tipos penales contra la Administración Pública buscamos activar las disposiciones constitucionales que prohíben a personas condenadas a delitos dolosos con penas de cinco años de cárcel o más, correr a cualquier cargo de elección popular. Aunado a esto buscamos modificar el Código Penal vigente para implementar de manera perpetua y obligatoria la inhabilitación para ejercer funciones públicas a los condenados por cualquier delito contra la Administración Pública. Por último, a través de la Ley 22 de junio de 2006, buscamos incapacitar legalmente de contratar con el estado a cualquier persona, natural o jurídica, declarada responsable por una serie de delitos frente a un Tribunal panameño.

Respetada Señora Presidenta, no debemos olvidar algunos de los convenios internacionales que en materia de lucha contra la corrupción ha firmado la República de Panamá y que hoy son fundamento legal para propiciar esta iniciativa. La Asamblea Nacional mediante Ley No. 15 de 2005 añade al régimen interno nacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y mediante Ley No. 42 de 1998 la Convención Interamericana contra la Corrupción. Relativo a las sanciones para personas condenadas por corrupción el artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas para la Corrupción dispone lo siguiente: *“...Cuando la gravedad de la falta lo justifique y en la medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer procedimientos para inhabilitar, por mandamiento judicial u otro medio apropiado y por un período determinado por su derecho interno, a las personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente Convención para: a) Ejercer cargos públicos; y b) Ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial del Estado.”*



Así mismo el artículo 9 del antes mencionado texto legal hace alusión a medidas preventivas en cuanto a la Contratación Pública al incluir que: *“Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción.”*

Es así que, inspirados por los mártires del 9 de enero, avalados por la Constitución Política y la ley, promovidos por un grupo numeroso de ciudadanos que pide a gritos un cambio, y con el compromiso de recoger la bandera nacional que nuestros héroes estudiantiles de la gesta patriótica de 1964 protegieron con sus vidas, presentamos ante este hemicycle la presente iniciativa ciudadana.



ANTEPROYECTO DE LEY No.

De de de 2017

Que modifica el Código Penal y dicta otra disposición.

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:

Artículo 1. Se Modifica el artículo 68 del Código Penal de la República de Panamá, así:

Artículo 68. La pena accesoria es consecuencia de la pena principal. En su aplicación, el juzgador deberá seleccionar entre las penas accesorias previstas en el artículo 50 de este Código la que, según la gravedad o naturaleza del delito, tenga relación directa con el delito o contribuya a evitar el peligro para los derechos de las víctimas.

Es obligatoria la aplicación de la pena accesoria, según las reglas del párrafo anterior, aunque no esté prevista en el delito de que se trate. Sin embargo, cuando se trate de personas condenadas por delitos contra la Administración Pública la inhabilitación para ejercer funciones públicas deberá ser aplicada de manera obligatoria por el juzgador.

Artículo 2. Se Modifica el artículo 69 del Código Penal de la República de Panamá, así:

Artículo 69. La pena accesoria tendrá una duración no superior a la principal y comenzará a cumplirse después de finalizado el cumplimiento de la pena de prisión, salvo la pena de inhabilitación para ejercer funciones públicas, cuya duración será de por vida, y la pena de multa, que se cumplirá una vez ejecutoriada la sentencia.

En ningún caso se suspenderá la ejecución de la pena accesoria por la aplicación de un subrogado penal.

Artículo 3. Se Modifica el artículo 338 del Código Penal de la República de Panamá, así:

Artículo 338. El servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma, o consienta que otro se apropie, sustraiga o malverse de cualquier forma dinero, valores o bienes, cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo, será sancionado con prisión de cinco a diez años.

Si la cuantía de lo apropiado supera la suma de cien mil balboas (B/.100,000.00) o si el dinero, valores o bienes apropiados estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de desarrollo o de apoyo social, la pena será de ocho a quince años de prisión.

Artículo 4. Se Modifica el artículo 339 del Código Penal de la República de Panamá, así:



Artículo 339. El servidor público que, en ejercicio de su cargo y aprovechándose de error ajeno, se apropie, sustraiga o utilice, en beneficio propio o de un tercero, dinero, valores o bienes nacionales o municipales será sancionado con prisión de cinco a diez años.

Artículo 5. Se Modifica el artículo 341 del Código Penal de la República de Panamá, así:

Artículo 341. El servidor público que, para fines ajenos al servicio, use en beneficio propio o ajeno, o permita que otro use dinero, valores o bienes que estén bajo su cargo por razón de sus funciones o que se hallen bajo su guarda será sancionado con prisión de cinco a diez años.

La misma pena se aplicará al servidor público que utilice trabajos o servicios oficiales en su beneficio o permita que otro lo haga.

Artículo 6. Se Modifica el artículo 342 del Código Penal de la República de Panamá, así:

Artículo 342. El servidor público que dé a los caudales o efectos que administra una aplicación o función pública distinta de aquella a la cual estuvieran destinados y resulta afectado el servicio o función encomendado, será sancionado con prisión de cinco a diez años.

La pena será de seis a doce años de prisión, si se actúa con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero, o si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de desarrollo o de apoyo social y resulta afectado el servicio o función encomendado.

Artículo 7. Se Modifica el artículo 345 del Código Penal de la República de Panamá, así:

Artículo 345. Será sancionado con prisión de cinco a diez años el servidor público que, personalmente o por persona interpuesta, incurra en las siguientes conductas:

1. Acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio o ventaja, para realizar, omitir o retardar un acto en violación de sus obligaciones, o quien las acepte a consecuencia de haber faltado a ellas.
2. Acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero o cualquier ventaja o beneficio indebido, para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a sus obligaciones, o como consecuencia del acto ya realizado.

Artículo 8. Se Modifica el artículo 346 del Código Penal de la República de Panamá, así:

Artículo 346. El servidor público que, desempeñándose como miembro del Órgano Judicial o del Ministerio Público, autoridad administrativa, árbitro o cualquier cargo que deba decidir un asunto de su conocimiento o competencia, personalmente o por persona interpuesta, acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero, beneficio o ventaja para perjudicar o favorecer a una de las



partes en el proceso, o a consecuencia de haber perjudicado o favorecido a una de ellas, será sancionado con prisión de cinco a diez años.

Igual sanción se aplicará al funcionario del Órgano Judicial o del Ministerio público que:

1. Por colusión o por otros medios fraudulentos, profiera resolución manifiestamente contraria a la Constitución Política o a la ley, de modo que cause perjuicio.
2. Por colusión o por otros medios fraudulentos, reciba o dé consejos jurídicos a cualquiera de las partes, de modo que cause perjuicio.
3. Retarde maliciosamente un proceso sometido a su decisión.

Si de las conductas previstas en este artículo resulta la condena de una persona inocente, la sanción será de cinco a diez años de prisión.

Artículo 9. Se Modifica el artículo 347 del Código Penal de la República de Panamá, así:

Artículo 347. Quien, bajo cualquier modalidad, ofrezca, prometa o entregue a un servidor público donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio o ventaja para que realice, retarde u omita algún acto propio de su cargo o empleo o en violación de sus obligaciones, será sancionado con prisión de cinco a diez años.

Artículo 10. Se Modifica el artículo 351 del Código Penal de la República de Panamá, así:

Artículo 351. El servidor público que, personalmente o por interpuesta persona, incrementa indebidamente su patrimonio respecto a los ingresos legítimos obtenidos durante el ejercicio de su cargo y hasta cinco años después de haber cesado en el cargo, y cuya procedencia lícita no pueda justificar será sancionado con prisión de cinco a diez años.

La pena será de seis a doce años de prisión si lo injustificadamente obtenido supera la suma de cien mil balboas (B/.100,000.00).

La misma sanción se aplicará a la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado.

Para efectos de esta disposición, se entenderá que hay enriquecimiento injustificado, no solo cuando el patrimonio se hubiera aumentado con dinero, cosas o bienes, respecto a sus ingresos legítimos, sino también cuando se hubieran cancelado deudas o extinguida obligación que lo afectaban.

Artículo 11. Se Modifica el artículo 352 del Código Penal de la República de Panamá, así:



Artículo 352. El servidor público que induzca a alguien a dar o a prometer indebidamente dinero u otra utilidad en beneficio propio o de un tercero será sancionado con prisión de cinco a diez años.

Artículo 12. Se Modifica el artículo 354 del Código Penal de la República de Panamá, así:

Artículo 354. Quien valiéndose de su influencia o simulando tenerla, solicite, reciba, acepte promesa o prometa en beneficio propio o de un tercero, dinero, bienes o cualquier otro provecho económico o con efecto jurídico, con el fin de obtener un beneficio de parte de un servidor público o un servidor público extranjero de una organización internacional en asunto que se encuentre conociendo o pueda conocer, será sancionado con prisión de cinco a diez años.

La pena será de seis a doce años de prisión, si quien ejerce o simule influencia es un superior jerárquico de quien conoce o debe conocer el asunto de que se trata.

Artículo 13. Se Modifica el artículo 356 del Código Penal de la República de Panamá, así:

Artículo 356. El servidor público que, ilegalmente, rechúse, omita o retarde algún acto propio de su cargo será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

Artículo 14. Se Modifica el artículo 364 del Código Penal de la República de Panamá, así:

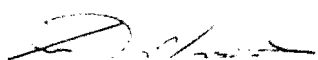
Artículo 364. Será sancionado con prisión de cinco a diez años quien:

1. Se concierte con otro para alterar el precio en un acto de contratación pública.
2. Solicite o reciba pago, pague o haga promesa de pago para participar o no participar en un acto de contratación pública.
3. Impida la participación de otro proponente o participante mediante violencia, intimidación o engaño.
4. Difunda noticias falsas o distorsionadas en alguno de los actos de contratación pública para sacar provecho a favor suyo o de un tercero.
5. Se concierte con su competidor para fijar el precio en uno o más actos de contratación pública.

Artículo 15. Se Modifica el artículo 16 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, así:

Artículo 16. Incapacidad legal para contratar. Podrán contratar con las entidades estatales, las personas naturales capaces conforme al Derecho Común, y las personas jurídicas legalmente constituidas, sean nacionales o extranjeras, siempre que no se encuentren comprendidas dentro de alguna de las siguientes situaciones:

1. Haber sido inhabilitadas para contratar mientras dure la inhabilitación.



2. Haber intervenido, en cualquier forma, en la preparación, evaluación, adjudicación o celebración de un procedimiento de selección de contratista, o excepción de este.
3. Haber sido condenadas, por sentencia judicial, a la pena accesoria de interdicción legal limitada a los derechos que se determinen en cada caso, y de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
4. Haber sido declaradas en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o declaradas en quiebra o concurso de acreedores, siempre que no esté rehabilitada.
5. Haber incurrido en falsedad al proporcionar información requerida de acuerdo con esta Ley.
6. Concurrir como persona jurídica extranjera y no estar legalmente constituida de conformidad con las normas de su propio país, o no haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento.
7. Habérseles resuelto administrativamente un contrato por incumplimiento culposo o doloso, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente Ley, mientras dure la inhabilitación.
8. Las personas que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública, Blanqueo de Capitales o cualquier otro delito contra el orden económico; Terrorismo, Financiamiento del Terrorismo, o cualquier otro delito contra la seguridad colectiva; delitos contra el patrimonio económico; y delitos contra la fe pública, por un Tribunal panameño.

Artículo 16. Esta Ley modifica los artículos 68, 69, 338, 339, 341, 342, 345, 346, 347, 351, 352, 354, 356 y 364 del Código Penal de la República de Panamá, y el artículo 16 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, Que regula la Contratación Pública y dicta otra disposición.

Artículo 17. Esta Ley empezará a regir el día de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy () días del mes de (), por ().

